

Venezuela: proceso de cambio, referéndum revocatorio y amenazas internacionales

Edgardo Lander*

* *Profesor de la Escuela
de Sociología
de la Universidad Central
de Venezuela*

La derrota del paro petrolero empresarial y las nuevas direcciones del modelo económico

El fin del paro empresarial-petrolero de diciembre 2002-febrero 2003 marca un punto de inflexión a partir del cual comienzan a producirse reorientaciones en el proceso político venezolano. El paro tiene un severo costo económico. No sólo se suspende por tres meses la exportación de hidrocarburos, la principal fuente de divisas del país, sino que se hace necesario importar gasolina para evitar que se detengan por completo el proceso productivo y la distribución de bienes básicos. Las pérdidas han sido calculadas en unos 10 mil millones de dólares.

Culmina el paro con una oposición políticamente golpeada, después de haber sido derrotada nuevamente –como en el golpe de Estado de abril de 2002– en su intento de derrocar a Chávez. El gobierno, con un apoyo popular que se vigoriza en la resistencia al paro, con la disposición de

la Fuerza Armada a actuar en defensa del orden constitucional y gracias a las posibilidades que las reservas internacionales brindan para realizar importaciones de emergencia, no sólo derrota al paro sino que, después de largos meses a la defensiva en que consume una alta proporción de sus energías en resistir los ataques de la oposición, recupera la iniciativa política.

Desde el punto de vista del gobierno es posible identificar en esta nueva coyuntura varios ejes problemáticos básicos a los cuales es indispensable dar respuestas inmediatas.

En primer lugar, dada la intensidad del conflicto con la oposición y la profundidad de la polarización de la sociedad venezolana, se acorta drásticamente el tiempo político con el cual cuenta el gobierno para llevar a cabo su programa de cambio. Las reformas políticas de los primeros años de gobierno habían contribuido a su legitimidad y apoyo popular, como quedó demostrado en el golpe de abril de 2002 y en el paro empresarial y petrolero. Pero en términos de condiciones materiales de los sectores populares, especialmente en salud, empleo, ingreso y seguridad pública, no se habían producido cambios, sin los cuales no era previsible conservar el apoyo social, que es una condición necesaria para consolidar y profundizar el proceso. Se hacen urgentes políticas que tengan impacto social a corto plazo.

En segundo lugar, el paro no sólo confirmó el nivel de dependencia de alimentos importados, sino igualmente el elevado nivel de concentración existente en el procesamiento y en la distribución de estos y otros productos básicos, quedando al desnudo la extrema vulnerabilidad de la economía venezolana y de su actual proceso político a las manipulaciones (precio y acceso) en el comercio internacional y a la voluntad de los sectores empresariales oligopólicos.

En tercer lugar, el paro petrolero y su devastador efecto económico confirmaron que Petróleos de Venezuela no operaba como una empresa pública sino que actuaba con la lógica de una gran transnacional energética en función de los intereses corporativos de su abultada planta gerencial (la autodenominada *meritocracia*) y de sus socios transnacionales. La principal fuente de riqueza del país estaba –en lo esencial– fuera del control del sistema político democrático.

Por último, existe el reconocimiento implícito o explícito de que había dos condiciones básicas que parecían haberse asumido como premisas en el diseño del proyecto de cambio y que, sin embargo, resultaron tener un sustento en extremo precario: la existencia de un sector empresarial nacional sólido con el cual impulsar políticas de desarrollo nacional¹, y el contar con un aparato administrativo del Estado con capacidad de responder a las incrementadas demandas y exigencias que se le asigna a la gestión pública.

“Posibilitado por las condiciones particulares que se dan como consecuencia de la renta petrolera en manos del Estado, se formulan los lineamientos de los ejes principales del nuevo modelo económico. Éste se define como endógeno y basado en la prioridad de la economía social, la generación de fuentes de trabajo y la democratización de la producción”

Las principales políticas del gobierno posteriores al paro pueden ser entendidas como respuestas a los retos planteados por la presencia entrelazada de este conjunto de condiciones.

La decisión más inmediata se refería a la empresa petrolera. No era posible pensar en reincorporar a sus funciones anteriores a quienes no sólo utilizaron sus posiciones en la industria para intentar derrocar a un gobierno democrático, sino que además realizaron múltiples saboteos a la industria con costos de millones de dólares. A pesar de las advertencias de la oposición y de comentaristas internacionales de que sin la meritocracia de Petróleos de Venezuela no sería posible reactivar la producción, fueron despedidos unos 17 mil gerentes y trabajadores y, en menos tiempo del previsto incluso por el propio gobierno, se recuperaron los niveles de producción.

Posibilitado por las condiciones particulares que se dan como consecuencia de la renta petrolera en manos del Estado, se formulan los lineamientos de los ejes principales del nuevo modelo económico. Éste se define como endógeno² y basado en la prioridad de la economía social³, la generación de fuentes de trabajo y la democratización de la producción. Se establece una política de control de cambios que produce una acelerada recuperación de las reservas internacionales.

A través de diversas modalidades de micro y pequeños créditos otorgados por entes financieros del Estado se fomentan organizaciones productivas de la economía social: pequeñas y medianas empresas, cooperativas y demás formas productivas asociativas. Se le da un extraordinario impulso a la utilización de las compras y la contratación de servicios y obras de todo el sector público para generar capacidad productiva. Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado, como las empresas hidrológicas y las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana, impulsan programas de capaci-



© Marcelo Rodríguez

ANÁLISIS [VENEZUELA: PROCESO DE CAMBIO, REFERENDUM REVOCATORIO Y AMENAZAS INTERNACIONALES]

tación y financiamiento para la creación de cooperativas con las cuales establecer contratos de compras, mantenimiento y *outsourcing* de servicios diversos. Dada la particular debilidad del sector agrícola y pecuario —el país importa cerca del 70% de sus alimentos— en estos programas se le da especial énfasis a estos sectores.

A partir del reconocimiento de la precariedad de las estructuras de la gestión estatal para impulsar las políticas públicas, particularmente las nuevas políticas sociales, se concluye que los tiempos políticos del conflicto venezolano no permiten esperar a que se impulsen reformas administrativas para mejorar dicha capacidad de gestión en función de las nuevas y urgentes exigencias. Por ello el ejecutivo opta por la creación de las *misiones*, una gama de programas extraordinarios que, haciendo un *by-pass* parcial de la burocracia estatal, busca responder a cada uno de los principales problemas sociales que, habiendo sido identificados como críticos, requieren respuestas urgentes. La *Misión Robinson* es un programa cívico militar que tiene por objetivo lograr la alfabetización a corto plazo de las 2 millones de personas que se estima que no saben leer y escribir en el país. En etapas posteriores del programa está contemplado que los recién alfabetizados realicen estudios de primaria. La *Misión Rivas* tiene por objetivo incorporar a estudios secundarios a personas de cualquier edad que, habiendo finalizado la primaria, no han realizado o culminado dichos estudios. La *Misión Sucre* se propone la incorporación masiva de bachilleres a estudios universitarios, dándole prioridad a los estudiantes de

sectores de clase media baja y pobres. La *Misión Mercal* tiene por propósito la comercialización de productos alimenticios y otros de primera necesidad para garantizar el suministro de bienes de calidad y bajo precio a los sectores de menores ingresos en todo el país. En el proceso de creación de canales alternativos de comercialización se propone fomentar cooperativas y pequeñas empresas. La *Misión Barrio Adentro*, con la participación masiva de médicos cubanos, es un programa para llevar atención médica primaria directa a sectores populares en todo el país. El Plan o *Misión Zamora* se propone la entrega de tierra a los campesinos, acompañada de capacitación, asistencia técnica, mercadeo, infraestructura, servicios y financiamiento. Con la *Misión Vuelvan Caras* se busca la generación de empleo permanente mediante la capacitación para el trabajo, la formación socio-cultural y la creación de núcleos de desarrollo endógeno en turismo, agricultura, infraestructura, servicios e industria. En contraste con las políticas sociales focalizadas que prevalecieron en todo el continente en los últimos lustros, estas políticas están orientadas al logro de la equidad social y a la superación de las desigualdades políticas y de las exclusiones culturales. Se enfatiza para ello la participación y la construcción de ciudadanía (Parra y Lacruz, 2003). No se conciben como políticas compensatorias de los efectos sociales negativos de las políticas económicas, sino como parte integral de éstas. La meta anunciada es que las misiones irán logrando niveles crecientes de coordinación para ir construyendo el tejido productivo y social de la nueva Venezuela y las nuevas instituciones estatales.

Es muy temprano para evaluar la viabilidad de este conjunto de programas y las posibilidades de su permanencia en el tiempo. Son altamente dependientes del ingreso petrolero, por lo que bajas significativas en éste pondrían en peligro su continuidad. Por otra parte, la improvisación y los bajos niveles de institucionalización que necesariamente están presentes en estos programas constituyen un peligroso caldo de cultivo para la corrupción. Lo que es indudable es que estos programas llegan a millones de personas y tienen un extraordinario impacto social y político. Si bien no parecen contribuir con una necesaria ampliación de la base de apoyo social del gobierno, sí han incidido en la consolidación del apoyo popular con el cual cuenta el proceso de cambio, e incrementado los niveles organizativos.

La oposición y el referéndum

En la fase posterior al paro empresarial-petrolero, en la Mesa de Negociación y Acuerdo, con la facilitación del Centro Carter y de la Organización de Estados Americanos (OEA), gobierno y oposición llegan a un acuerdo político para “una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral”⁴. Habiendo sido derrotada en sus dos intentos por derrocar a Chávez por la vía del golpe de Estado y mediante el paro insurreccional, la oposición

anuncia que logrará su objetivo mediante el *referéndum revocatorio* que está contemplado en la Constitución⁵.

Combinando 2.700 centros fijos y la colecta itinerante, durante cuatro días del mes de diciembre de 2003 la oposición recoge firmas para el revocatorio. Anuncia que tiene un millón de firmas más de las requeridas. Sin embargo, cuando concluye el proceso de recolección, en las zonas del Este de Caracas –su principal base de apoyo– hay un silencio sepulcral. No sólo no hay ambiente de celebración sino que ni siquiera se realiza la concentración prevista para esa noche. Los líderes de la oposición ni asisten a ésta ni hacen declaraciones públicas.

En la medida en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) va analizando las firmas, quedan claras las razones de este silencio. Decenas de miles de planillas no cumplen con las normas básicas que permitan su validación. Decenas de miles de firmas corresponden a muertos, menores de edad, extranjeros o personas que no están inscritas en el Registro Electoral Permanente. Miles de planillas han sido llenadas con la misma caligrafía, muchas de ellas con firmas similares (planillas planas). A finales de febrero de 2004 el CNE anuncia el resultado preliminar de su evaluación de las firmas presentadas. Rechaza las firmas que claramente no cumplen con los requisitos establecidos, reconoce alrededor de 1.900.000 firmas como válidas y somete a reparo (ratificación) un número significativo de firmas con algún defecto y las llamadas planillas planas.

La oposición responde a esta decisión con extrema virulencia. Algunos dirigentes de su Coordinadora Democrática llaman a desconocer al árbitro electoral. Varios gobernadores de la oposición se declaran en rebelión contra el gobierno nacional. A partir de una confrontación violenta con la Guardia Nacional que se produce en una marcha de la oposición el 27 de febrero, los sectores más radicalizados organizan la llamada *Operación*

***“... gobierno y oposición llegan a un acuerdo político para “una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral”.
Habiendo sido derrotada en sus dos intentos por derrocar a Chávez por la vía del golpe de Estado y mediante el paro insurreccional, la oposición anuncia que logrará su objetivo mediante el referéndum revocatorio que está contemplado en la Constitución”***

Guarimba. Durante cinco días cierran calles y queman neumáticos y basura en sectores de clase media alta de Caracas. La policía de estos municipios de la oposición deja hacer e incluso apoya las acciones violentas. Con presencia de francotiradores se producen nuevos enfrentamientos con la Guardia Nacional, con un saldo de nueve muertos y decenas de heridos⁶.

Este clima de violencia se da en un contexto en el cual la oposición está profundamente dividida. Además de la posibilidad de que se realice a corto plazo un referéndum revocatorio para el presidente de la República, a mediados de este año están previstas las elecciones para gobernadores y alcaldes en todo el país. Ello significa que, al mismo tiempo en que la oposición tenía que decidir si acudía o no a los reparos, debía decidir si presentaba candidatos a las elecciones o se abstenía. Difícilmente podía justificar que no participaría en el proceso de reparos para el referéndum revocatorio por considerar ilegítimo al poder electoral y declarar con ello cerrada en forma definitiva la vía institucional, y simultáneamente postular candidatos a gobernadores y alcaldes ante ese mismo cuerpo. Para un sector de la oposición, especialmente para su partido más grande –Acción Democrática–, la prioridad está en las elecciones y, en consecuencia, han concentrado sus esfuerzos en prepararse para ellas. De acuerdo a otros partidos de la oposición como Proyecto Venezuela y Primero Justicia, así como varias organizaciones de la autodenominada sociedad civil, ya el gobierno había traspasado el límite y era un régimen autoritario que había dado fin a la democracia en el país. El calificativo más suave utilizado por estas organizaciones para referirse a otros sectores de la oposición que seguían negociando una salida electoral al conflicto fue el de cómplices del gobierno dictatorial. La mayor parte de los medios de comunicación privados han mantenido una sistemática campaña de denuncia a los traidores que, con sus actitudes poco combativas, le hacen el juego “al dictador”.

Atravesados por estas profundas tensiones, todos los partidos de la oposición postularon candidatos a alcaldes y gobernadores. Con pocas excepciones, expresión de su creciente fragmentación, no se pusieron de acuerdo para la presentación de candidaturas unitarias. La Coordinadora Democrática continuó reuniéndose para negociar con el CNE las condiciones para la realización de los reparos, mientras que otros de sus voceros continuaban refiriéndose al carácter “dictatorial” del “régimen”.

Aun sin haber superado estas tensiones, a finales de abril la Coordinadora Democrática oficializó su disposición a participar en el proceso de reparos decidido por el CNE y continuaba en el desarrollo de sus respectivas campañas electorales a lo largo y ancho del país. El reparo se realizará a finales del mes de mayo, y el referéndum revocatorio, en caso de que la oposición obtenga las firmas requeridas, sería en el mes de agosto. Las elecciones de gobernadores y alcaldes están previstas para el mes de septiembre.

Las amenazas internacionales

Este período se caracteriza igualmente por cambios en el contexto geopolítico hemisférico. A diferencia del momento en que Chávez llegó a la presidencia, los cambios de gobierno en Brasil, Argentina e incluso en Bolivia, han permitido superar las condiciones de aislamiento del gobierno venezolano. Es creciente la solidaridad con que cuenta el proceso bolivariano por parte de organizaciones sociales populares en todo el continente, especialmente las que están articuladas en la resistencia a la globalización neoliberal. Las anteriores dudas de muchos sectores de izquierda y de movimientos sociales sobre un proceso encabezado por un líder militar carismático más, con sus potencialidades autoritarias, han ido cediendo al reconocimiento de la profundidad de los procesos de cambio que ocurren en el país y la importancia de las orientaciones de la política internacional del gobierno, en particular en la lucha contra el ALCA.

En esa misma medida se incrementan las amenazas externas que confronta el proceso, especialmente por parte de la Administración Bush. Además de las reiteradas "advertencias" y denuncias formuladas por los más representativos funcionarios de dicho gobierno y el apoyo al golpe de 2002, ha sido sistemático el sostén político y financiero a prácticamente todos los partidos y organizaciones sociales que forman hoy parte de la oposición venezolana, apoyo que se incrementó significativamente después de la derrota del golpe⁷. En marzo de 2004, el General James T. Hill, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, caracterizó al gobierno de Venezuela como parte de un "populismo radical" que representa "una amenaza creciente para los intereses de Estados Unidos"⁸.

Particularmente peligrosa es la insistencia en crear un ambiente de tensión con Colombia a propósito de un supuesto apoyo del gobierno venezolano a la guerrilla o su intención de exportar la revolución. Expresión de la complicidad de la derecha colombiana con esta política fue la decisión del Senado de dicho país de respaldar a la oposición, exigir la realización del referéndum revocatorio, denunciar al gobierno de Chávez ante la OEA y solicitar la aplicación de la Carta Democrática (*El Universal*, 2004[b]). A los pocos días, el diario *El Universal* (2004[a]) de Caracas destaca con un titular de primera plana ("Chávez es un peligro continental") las declaraciones de Enrique Gómez Hurtado, uno de los máximos voceros del conservadurismo colombiano. Dada la extrema agresividad de la política exterior de Bush y el total apoyo con que ésta cuenta por parte del gobierno colombiano, no puede descartarse la posibilidad de que, ante el fracaso de la desestabilización interna, se genere una situación conflictiva que sirva de justificación para una intervención externa vía Colombia.

Bibliografía

Aporrea 2004 "Organizaciones de DD.HH. exigen fin de la violencia, garantizar la voluntad popular, la institucionalidad democrática y piden a medios promover tolerancia. Derecho a la manifestación implica un ejercicio 'pacífico y sin armas'", 2 de marzo <www.aporrea.org>

El Universal 2004[a] (Caracas) 18 de abril <www.el-universal.com>

El Universal 2004[b] (Caracas) 14 de abril <www.el-universal.com>

Parra, Matilde y Lacruz, Tito 2003 *Seguimiento activo a los programas sociales en Venezuela, Caso de los Multihogares de Cuidado Diario, Informe final* (Caracas: CISOR-Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, Proyecto Observatorio Social) p. 80 <<http://www.apalancar.org/archivos/1006/Seguimiento%20Programas%20Sociales%20GSCESAP.pdf>>

República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Producción y Comercio 2003 *Declaración de Pozo de Rosas: Principios rectores de la política industrial de la República Bolivariana de Venezuela* (Caracas) mimeo.

Vila Planes, Enrique 2003 "La economía social del proyecto bolivariano", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCV) Vol. 9, N° 3, septiembre-diciembre.

Notas

1 Esto remite a viejos debates sobre las implicaciones de la ausencia de una burguesía nacional para el desarrollo capitalista en el mundo periférico.

2 Los lineamientos principales de esta propuesta de raíces en el desarrollismo cepalino están contenidos en República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Producción y Comercio (2003).

3 De acuerdo al equipo que ha trabajado estas propuestas en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, la economía social "es una economía alternativa", donde "privan las prácticas democráticas y autogestionarias". Está "motorizada por las formas de trabajo asociado y no asalariado" y "la propiedad sobre los medios de producción es colectiva (salvo en el caso excepcional de las microempresas)". Está "centrada en el reparto igualitario del excedente", es "solidaria con el entorno social en que se desarrolla" y está "aferrada a su propia autonomía frente a los centros monopólicos del poder económico o político" (RBV, Ministerio de Planificación y Desarrollo, Coordinación de Economía Social, 2004). Para una discusión más amplia del sentido de la economía social dentro del proyecto de cambio en Venezuela, ver Vila Planes (2003).

4 "Acuerdo entre la representación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática y las organizaciones políticas y de la sociedad civil que la conforman", Caracas, 29 de mayo de 2003 <http://asesormesanegociacion.com/DocMesa/DocMesa_20030523_acuerdo.htm>

5 El Artículo 72 de la Constitución establece que todos los cargos electos son revocables mediante referéndum después de haber pasado la mitad del período para el cual los fun-

cionarios o funcionarias fueron electos. Para activar el referéndum se requiere un total de firmas no menor al 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción. Para destituir al funcionario o funcionaria se requiere que el voto a favor de su sustitución sea mayor que el número de votos en contra y adicionalmente que sea superior al número de votos obtenidos por el funcionario o funcionaria cuando fue electo/a. Para revocar el mandato a Chávez, la oposición requiere aproximadamente 2.450.000 firmas para activar el revocatorio y más de 3.757.773 votos en el referéndum.

6 Estos muertos y heridos forman parte, como durante el golpe de 2002, de un objetivo expreso de la oposición con el propósito de denunciar al gobierno por la violación de los derechos humanos. Son hechos que requieren ser investigados, ya que con seguridad hubo excesos de las fuerzas armadas y, en contra de las normas establecidas, en algunos casos se utilizaron armas de fuego en contra de manifestantes. Las denuncias de torturas generalizadas y de desaparecidos forman parte del espectáculo mediático de la oposición, y de su nueva agenda en el campo internacional. Ver *Aporrea*, 2004.

7 Para una extensiva documentación del financiamiento y asesoría del gobierno de Bush a todos los principales partidos y organizaciones de la oposición venezolana, ver *Venezuelafoia.info*, un sitio web dedicado a investigar la intervención de EE.UU. en Venezuela <<http://www.venezuelafoia.info>>

8 "Testimony of General James T. Hill United States Army Commander United States Southern Command Before the House Armed Services Committee United States House of Representatives" House Armed Services Committee, 24 de marzo de 2004 <http://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2004_hr/04-03-24hill.htm>